

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por JOSÉ EPIFANIO YARCE RESTREPO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA (Rad. No. 05001-31-05-009-2016-01542-02).

ANTECEDENTES

El señor José Epifanio Yarce Restrepo demanda a Colpensiones y a la Junta Regional de Invalidez de Antioquia con el fin de que declare la nulidad de unos dictámenes y que presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, de origen común y fecha de estructuración el 12 de julio de 2010 y, en consecuencia, se condene a Colpensiones a reconocerle y pagarle la pensión de invalidez de origen común, incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, desde el 12 de julio de 2010; los intereses moratorios; la indexación sobre las mesadas adeudadas y las costas del proceso (fls. 2/3).

Como sustento de sus pretensiones, manifiesta en síntesis lo siguiente: se encuentra afiliado al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones; esta entidad, mediante dictamen No. 2016138384 XX, le calificó su capacidad laboral y le fue asignado un porcentaje de pérdida del 31%, con fecha de

estructuración el 9 de diciembre de 2015 de origen común; inconforme con el dictamen se practicó uno nuevo ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, organismo que mediante Dictamen No. 60974 del 2 de septiembre de 2016, le asignó una pérdida de capacidad laboral del 40.37%, con fecha de estructuración del 9 de diciembre de 2015 de origen común; nuevamente, inconforme con lo anterior, se le practicó un nuevo dictamen ante el Centro de Investigaciones Médicas de Antioquia, donde se le fijó una pérdida de capacidad laboral del 59.9%, con fecha de estructuración el 11 de julio de 2010, de origen común; se practicó un nuevo dictamen ante la IPS UNIVERSITARIA de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA el 13 de octubre de 2016, donde se estableció que tiene una pérdida de capacidad laboral del 53.89%, con fecha de estructuración del 12 de julio de 2010; finaliza diciendo que cumplió con el requisito de la reclamación administrativa (fls. 1/2).

La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia dio respuesta oportuna al libelo, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Sobre los hechos solo aceptó el que hace referencia al dictamen realizado por ellos. De los demás dijo que no le constaban. Como única excepción formuló la que denominó inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones (fls. 114/116).

Colpensiones dio igualmente respuesta oportuna a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Frente a los hechos adujo como ciertos los que hacen referencia a la afiliación del demandante a la entidad, los que hacen alusión a los contenidos de los dictámenes periciales y el del agotamiento de la reclamación. Sobre los demás dijo que no le constaban o que no eran de aquellos que debiera darle respuesta. Como excepciones propuso las de inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez al actor, petición de lo no debido, improcedencia de intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, compensación indexada e imposibilidad de condena en costas (fls. 122/126).

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 31 de julio de 2019, ABSOLVIÓ tanto a COLPENSIONES como a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor José Epifanio Yarce Restrepo,

a quien le impuso las costas del proceso, fijándole como agencias en derecho la suma de \$100.000 en favor de cada una de las codemandadas (fl. 171).

Esta Sala de Decisión conoce del asunto en el grado de consulta.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario, la existencia de varios dictámenes de pérdida de capacidad laboral del accionante, los cuales difieren tanto en la pérdida de capacidad laboral como en la fecha de estructuración de la invalidez, pero son consecuentes en cuanto al origen determinándolo en común. En efecto, de manera cronológica, se tiene que el realizado por el CENTRO DE INVESTIGACIONES MEDICA -CIMA- (fls. 43/44), califica la pérdida de capacidad laboral del demandante en un 59.9%, con fecha de estructuración el 11 de julio de 2010. Luego el realizado por COLPENSIONES (fls. 45/50), calificó la pérdida de capacidad laboral en un 31%, con fecha de estructuración el 9 de diciembre de 2015. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia (fls. 52/53), determinó la pérdida de capacidad laboral en 40.37%, con fecha de estructuración el 9 de diciembre de 2015. Por último, la IPS UNIVERSITARIA de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (fls. 38/40), califica la pérdida de capacidad del demandante en un 53.89%, con fecha de estructuración el 12 de julio de 2010.

Tampoco se discute que el actor se encuentra afiliado a Colpensiones, y que la última cotización que aparece reportada en su historia laboral es la correspondiente al ciclo del mes de septiembre de 2010 (fl. 54).

Así las cosas, el tema central en el de marras se circunscribe a determinar si el señor José Epifanio Yarce Restrepo es inválido, para lo que será necesario y fundamental definir de los dictámenes obrantes al interior del proceso, cual es el

que muestra la realidad del estado de salud del afiliado, así como la de determinar la fecha de la estructuración del estado de invalidez.

El fallador de primer grado, luego de advertir los diferentes dictámenes que obran al interior del expediente, con base en lo normado, básicamente en el artículo 61 del C. P. del T. y de la S.S., y luego de sopesar sus argumentaciones, optó por señalar que el dictamen rendido por la IPS UNIVERISTARIA calificaba todas las patologías sufridas por el actor, no obstante, no estuvo de acuerdo con la fecha de estructuración fijado por dicha entidad, indicando que el que más se ajustaba para definir tal fecha en consideración a la exigencia de la normatividad era la determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y, con base en tal data, analizó el proceso llegando a la conclusión que el demandante no reunía los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, ni siquiera bajo los postulados de la condición más beneficiosa, teniendo en cuenta para ello lo señalado por la sentencia SU-442 de 2016.

Al respecto, cabe anotar que el Juzgador que conozca de una controversia sustentada en diferencias frente a una o más experticias, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba (art. 61 del C.P. del T. y de la S.S.), puede perfectamente acoger aquella que le dé mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, sin que ello implique necesariamente una trasgresión al debido proceso y al derecho de defensa, pues en últimas es el operador como director del proceso quien está revestido de potestades legales para tomar una decisión.

Así lo ha estimado por demás y en decisión reciente la Sala Civil de la CSJ, en sentencia del 15 de junio de 2016, SC 7817-2016 (M.P. Dra. Margarita Cabello Blanco) donde frente a dicha facultad valorativa expresó:

“El Juez, al observar las conclusiones del dictamen, deberá comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar y sobre ello se reitera, que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta.

No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, como ya se esbozó en anotación anterior, se realizará mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo. (...).

Es él quien cuenta con la suficiente formación para desecharla y por ende apartarse de sus conclusiones o darle el mérito total o parcial que encuentre más ajustado al caso. Por ende, se torna en una exigencia sine qua non que debe ofrecer todo dictamen pericial para que pueda admitirse como prueba de los hechos que analiza, la debida y adecuada fundamentación; “y compete al juzgador apreciar con libertad esa condición, dentro de la autonomía que le es propia”.

En igual sentido, la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con Radicado 70662 del 6 de diciembre de 2016, en la que se reiteró que:

“...en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas.

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo afirmado en sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, que fue ratificado por la Sala, entre otras, en sentencia de 5 de noviembre de 1998 (Radicación 11.111).

"El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

"Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así

la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

"La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho.

"Corresponde es los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal Laboral les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso".

Y frente aquellos casos donde se presentan diversidad de dictámenes periciales, la Sala de Casación Laboral en sentencia con Radicado SL4346-2020, señaló:

"De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez se determina, en primera oportunidad, por las entidades de seguridad social y las juntas de calificación de invalidez, conforme al manual único para la calificación vigente al momento de su práctica -decretos 917 de 1999 o 1507 de 2014, según el caso (...).

Aunque la Corte ha admitido la relevancia de los dictámenes que expiden las juntas de calificación de invalidez por tratarse de conceptos técnicos y científicos emanados de órganos autorizados por el legislador, lo cierto es que estos constituyen un medio de prueba y, como tal, deben someterse a la valoración del juzgador bajo los principios de libre formación del convencimiento y apreciación crítica y conjunta de la prueba, previstos en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697-2019, CSJ SL3380-2019, CSJ SL 3992-2019 y CSJ SL5601-2019). En esa

medida, el juez no puede simplemente ignorar las circunstancias que rodean el caso, la conducta procesal y los demás elementos probatorios adosados, pues todos, en conjunto, permiten determinar el momento en el que se produce, de manera definitiva, la disminución de la capacidad laboral de la persona.

Así las cosas, esta Sala de Decisión no comparte los argumentos esbozados por el juzgador de instancia para llegar a la conclusión por él obtenida, por cuanto ha sido criterio pacífico y reiterado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que en los procesos donde se presentan varios dictámenes de pérdida de capacidad laboral de una persona, el juzgador debe escoger de manera integral el que le genere mayor certeza de la discapacidad o invalidez que este tenga, sin que pueda a su arbitrio formar uno nuevo considerando diferentes factores de uno y de otro, pues por ley la potestad para emitir los dictámenes está en cabeza de las instituciones que fueron instituidas para ello. Al respecto, téngase en cuenta lo señalado por la Alta Corporación en sentencia con radicado SL1021-2019, en la que textualmente adocrinó:

“Como puede observarse, tanto a partir de la regulación legal como reglamentaria del Sistema General de Seguridad Social Integral, la pensión de invalidez tiene un trámite detallado y debidamente reglado, que involucra la acción coordinada tanto del afiliado como de diferentes instituciones que integran dicho sistema, procedimiento que está fundado en la identificación de las condiciones para el acceso a una prestación de dicha naturaleza. Para ello, se establece un trámite que en verdad y en criterio de la Sala involucra tres estadios: el primero conformado por las diferentes administradoras de pensiones y por las aseguradoras, como lo son el Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales, hoy Laborales, las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y las Entidades Promotoras de Salud - EPS; el segundo que está integrado por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez; y el tercero, a cargo de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Este diseño legal esta direccionado, de una parte, a otorgar plena eficacia al derecho del debido proceso de los usuarios, y de otra, a proteger los derechos constitucionales de quienes, al ver gravemente disminuida su capacidad laboral, quedan imposibilitados para prodigarse las condiciones económicas mínimas, propias y de su núcleo familiar dependiente; en otras palabras, tal procedimiento fue previsto por el legislador para garantiza al afiliado el derecho a percibir del Sistema las prestaciones asistenciales y económicas que de él emanan, siempre y cuando, real y efectivamente se configuren los requisitos para ello.

Lo anterior, sin mayor hesitación, lleva a la Sala a poner de presente que fue el propio legislador quien, en principio, asignó a tales instituciones una competencia específica y clara en relación con las controversias relacionadas con la pérdida de la capacidad laboral y la fecha de estructuración, que no puede ser desconocida por los jueces so pretexto de las facultades establecidas en el artículo 61 CPTSS, pues es por virtud de esa configuración normativa en cabeza del legislador, que los dictámenes de las Juntas Regionales ora Nacional de Calificación de Invalidez, son los medios de convicción idóneos para determinar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración de la misma, ítems que, en principio se reitera, se tienen como invariables, no por el hecho de que tales aspectos exijan una determinada solemnidad, que desde luego no la tienen, sino porque establecerlos requiere de unos conocimientos técnicos y científicos de los que carece el operador judicial, razón por la cual el legislador, se insiste, los difirió a tales organismos especializados en el tema.

Ahora bien, como fue el propio legislador quién en el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, en los términos modificados por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, quien previó que «Contra dichas decisiones proceden las acciones legales», es evidente que, desde una primera óptica, tales dictámenes sí pueden ser controvertidos ante la jurisdicción ordinaria laboral, pero para lograr desvirtuar los aspectos técnico científicos que ellos contienen, imperiosamente tiene que ser con una probanza que no le amerite al Juez el más mínimo asomo de duda en cuanto al equívoco en que eventualmente pudo incurrir la junta respecto de los puntos técnico científicos que se controvierten, preferiblemente, debe ser otro dictamen rendido por la misma junta o por otra de diferente regional; pues, se insiste, son éstos los organismos instituidos por el legislador facultados para rendir preferentemente, tales pericias, lógicamente, siguiendo los precisos lineamientos contenidos en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez.

Ahora bien, cuando se controvierte un dictámen, el operador judicial está sujeto a tomar en su integridad el que de manera objetiva le de mayor credibilidad y certeza sobre los puntos debatidos, pero lo que no puede hacer, es armar o configurar uno propio a su acomodo, tomando datos de un lado y de otro, que fue precisamente lo que aconteció en el caso de autos en el cual el fallador de segundo grado edificó a su manera de ver un dictámen donde estableció su propio porcentaje de pérdida de capacidad laboral y una fecha de estructuración.

Admitir un actuar así, no sólo estaría en contravía de la facultad señalada en el artículo 61 del CPTSS, sino también del derecho de defensa y del debido proceso de las partes involucradas en el proceso, y ese no es el sentido de lo enseñado por la Corte en la sentencia CSJ SL. 19 oct. 2006, rad. 29622, en la que se apoya el Tribunal, pues dicha providencia es clara en adoctrinar:

Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces

del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías (Se subraya).

Es por lo anterior, que la Corte ha sido clara en que, si en un proceso se encuentran enfrentados dos dictámenes, uno de la Junta Regional y otro de la Nacional, el juez del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud de la libertad probatoria prevista por el artículo 61 del CPTSS, está facultado para escoger lo establecido en el primero o en el segundo, e inclusive ordenar un tercero, pero el que acoja debe tomarlo en su integridad, esto es, no puede escindirlo y menos configurar uno nuevo con apartes de uno y otros. En efecto en sentencia, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, se precisó:

De la misma manera tiene señalado la Corporación, que el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de invalidez no obliga al juzgador y que si para definir una determinada controversia se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles uno rendido por la junta regional y otro por la nacional, podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad analizado dentro del conjunto de elementos probatorios con los que cuente, pudiendo también optar si lo considera menester, por ordenar un tercer dictamen todo dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Subraya la Sala).

Todo lo anterior lleva a la Sala a concluir que el cargo prospera, pues como se vio, para efectos de conceder la pensión de invalidez que emana del sistema de seguridad social, en principio, son los dictámenes de las juntas, bien Regionales ora Nacional, la prueba idónea para determinar tanto el grado de la pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración, pues tales medios de convicción no sólo están provistos de los datos técnicos y científicos que tienen los profesionales que conforman dichas juntas creadas por el legislador, sino porque los mismos se establecen en estricto apego al Manual Único de Calificación de Invalidez contemplado por el Decreto 917 de 1999”

Siendo lo anterior cierto, entrará esta Corporación a analizar de los diferentes dictámenes obrantes al interior del plenario, cual es el que le genera mayor grado de certeza frente a las condiciones de salud del señor José Epifanio Yarcé Restrepo.

Frente al asunto, debe señalarse que lo pretendido es la declaratoria de nulidad de los dictámenes emitidos tanto por Colpensiones como por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, los cuales fueron realizados el 24 de febrero de 2016 y el 2 de septiembre del mismo año, respectivamente, dictaminando una pérdida de capacidad laboral del 31% y 40.37% en su orden, definiendo ambas entidades como fecha de estructuración el 9 de diciembre de 2015, de origen común, data esta que hace referencia a la evaluación por optometría en la que se señala “*AV CC OD NPL A VCC OS: 20/20*”, que indica en cuanto a la agudeza visual del ojo derecho a la no percepción de luz y con una buena agudeza visual por el otro ojo.

Es de anotar que no se comparte el argumento del juzgador de instancia en cuanto a que el procedimiento de evisceración o extracción del ojo derecho le fue realizado al demandante el 15 de abril del año 2015, por cuanto revisado el material probatorio al interior del plenario, lo que se evidencia de dicha data son solicitudes de autorización de servicios de salud, más no que ya se haya realizado tal procedimiento, como parece entenderse del folio 73, argumento que se acompasa con lo descrito en la historia clínica, pues de ésta se evidencia que para el 9 de diciembre de 2015, en consulta en la “*E.S.E BELLOSALUD*”, se relaciona como motivo de consulta “*PACIENTE REMITIDO POR OFTALMOLOGÍA SEGÚN OFTALMOLOGIA EL PACIENTE NO DESEA EVISCERACION REQUIERE INFORME DE HISTORIA CLINICA POR OPTOMETRIA PARA SEGUIR TRAMITE DE INCAPACIDAD POR INVALIDEZ PARA PENSION*” (fl. 58), lo que implica que para el mes de diciembre de ese año aún no se le había realizado, hecho que es reconfirmado con lo relacionado en la misma consulta médica donde como antecedentes personales se describe “*QUIRURGICOS NO REFIERE*” y, más aún, de las probanzas obrantes en las diligencias, no se puede concluir que al señor José Epifanio Yarce Restrepo se le haya practicado la cirugía de “*EVISCERACIÓN DEL GLOBO OCULAR*” de su ojo derecho, pues no aparece en el plenario algún registro que así lo certifique.

Por lo anterior, no le resultaba dable al perito de la IPS UNIVERSITARIA haber estructurado la pérdida de capacidad laboral del demandante con fecha del 12 de julio de 2010, por cuanto la desfiguración facial que él hace referencia en el dictamen, y que sustentó en la audiencia de trámite y juzgamiento, no se presentaba en la forma por él descrita para tal data, pues a lo sumo, lo presentado

en esa fecha fue un “*TRAUMA EN OJO CON CUERPO EXTRAÑO EN OJO DEERCHO (SIC) MIENTRAS ESTABA EN LA CALLE MIENTRAS ESTABA LABORANDO, CON DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL, FUE VALORADO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DONDE DIRECCIONARON A OFTALMOLOGIA DONDE VALORARON DONDE DIERON DX: DE AMAUROSIS EN OJO DERECHO SECUELA DE HERIDA OCULAR PENETRANTE EN OD. DIERON INDICACION DEL MAL PRONOSTICO DE EL DX*” (fl. 71), conllevando lo anterior a que tal dictamen carezca de la fuerza suficiente para darle plena validez, al menos en cuanto a su fecha de estructuración, pues el artículo 3 del Decreto 1507 de 2014 se refiere a ésta como:

“Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado éstos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. ' Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral.

En iguales términos el análisis frente el dictamen realizado por el CENTRO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS DE ANTIOQUIA -CIMA-, que si bien dada la fecha en que fue realizado, 26 de junio de 2014, se aplicó el Decreto 917 de 1999, se avizora del mismo que la fecha de estructuración definida para el señor José Epifanio Yarce Restrepo lo fue el 11 de julio de 2010, siendo tal calenda la que corresponde al momento a partir de la cual inició con la patología motivo de calificación, sin que, por tanto, implique que se pueda considerar como inválido teniendo en cuenta el análisis ya realizado.

Para esta Corporación, el dictamen que más se ajusta a la condición de salud del demandante, y que define con mayor acierto su pérdida de capacidad laboral, es el realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 2 de septiembre de 2016, quien para tal momento tuvo en cuenta como

*“DIAGNOSTICO MOTIVO DE CALIFICACION”, las siguientes patologías: defectos del campo visual, diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación, ceguera de un ojo e hipertensión esencial (primaria), definiendo para las mismas una pérdida de capacidad laboral del 40.37%, de origen común y con fecha de estructuración el 9 de diciembre de 2015, la que fue tomada en cuenta con base en el concepto de optometría “AVCC OD NPL AVCC OS:20/20”, acogiendo las disposiciones consagradas en el Decreto 1507 de 2014; dictamen éste que, por solo ejercicio, se le adicionara la patología de desfiguración facial que tuvo en cuenta el perito de la IPS UNIVERSITARIA, elemento que no aparece de manera específica en los diagnósticos motivo de calificación en el dictamen de la Junta, tampoco sería suficiente para alcanzar una pérdida de capacidad laboral del 50%, que le permitiera al demandante acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, pues esta es la exigencia consagrada en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 que señala: *“Para los efectos del presente Capítulo se considera inválida la persona que cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”*.*

Y es que tal dictamen, como se dijo, acoge la condición clínica del demandante, a más de que en este se plasma los diferentes elementos de calificación señalados por el Decreto 1507 de 2014, que es el manual vigente para la fecha en que fue evaluado el señor José Epifanio Yarce Restrepo, que lo fue el 2 de septiembre de 2016 (fl. 52).

Esta serie de circunstancias, y la aplicación simple y sencilla del principio de que quien afirma un hecho debe respaldar su dicho en la correspondiente probanza, conllevan a la Colegiatura, sin necesidad de mayores elucubraciones a CONFIRMAR la decisión absolutoria objeto de revisión, pero por las razones expuestas en esta providencia. Sin costas en esta instancia, dada la manera como se conoce del asunto.

DECISIÓN:

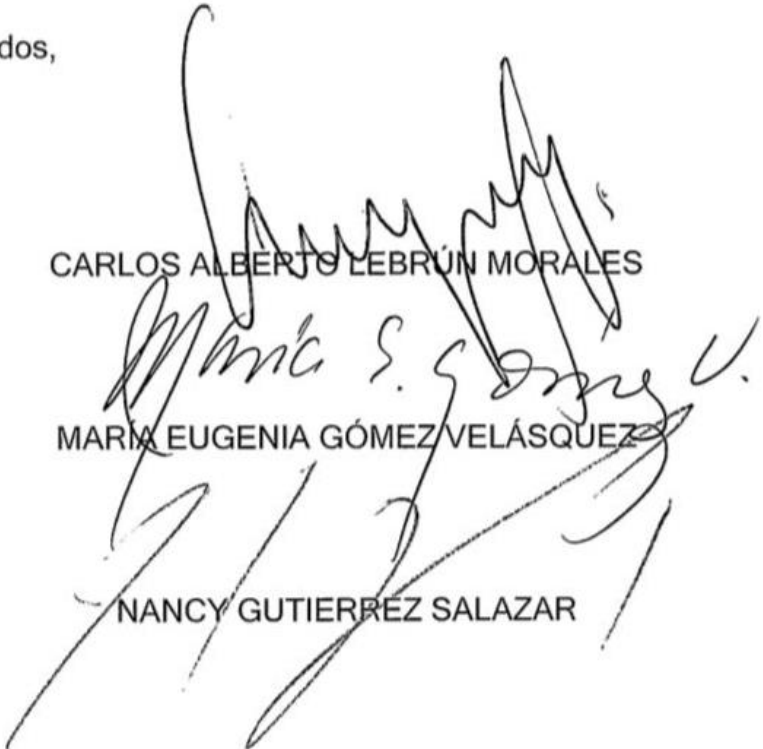
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de consulta de fecha y

procedencia conocidas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO, en aplicación del numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, durante la vigencia del Decreto Legislativo 806 del 2020, según lo dispuso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la providencia AL2550-2021

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR